

65ª REUNION — Continuación de la 29ª SESION ORDINARIA (ESPECIAL) —
SEPTIEMBRE 11 DE 1964

Presidencia del señor diputado Arturo Mor Roig

Secretarios: doctores Eduardo T. Oliver y Guillermo González

Prosecretarios: doctor Enrique A. Pardo y señor Sebastián Oreste Cánepa

DIPUTADOS PRESENTES:

ABALO, Raúl
ACHIARY, Juan C.
ALFONSIN, Raúl R.
ALMADA, Jorge Mariano
AMURA, Luis
ARANA, Tomás P.
ARIAS, Luis Osvaldo
ARRASCAETA, Félix de
ARROYO, Ramón F.
AVILA, Eduardo Miguel
BACCAY, Rodolfo D.
BACHINI, José A.
BAFFICO, Alejandro O.
BALBI, Isidro G.
BALBOA, Hernán A.
BALESTRA (h.), Juan
BELGRANO RAWSON, Guillermo A.
BELNICOFF, Manuel
BERHONGARAY, Pedro J.
BERINI, Carlos J.
BERRINI, Emilio
BILBAO, Saturnino
BO, Angel
BOBILLO, Luis Ignacio
BOFFI, Luis L.
BOGLIANO, Palmiro B.
BRAVO, Carlos A.
BRAVO, Héctor F.
BUSACCA, Salvador F.
CÁCERES, Roberto M.
CAGGIANO, Angel R.
CALABRESE, Pablo
CALVÓ, Carlos Alberto
CARDENAS, Juan Carlos
CARO, José Armando
CARREIRA, Emilio
CASAS, David Jorge
CASTELLAR, Miguel A.
CATALAN, Guillermo
CENTENO, José Isaac
COLELLO, Clemente Juan
CONDOLUCI, Domingo A.
CONTINI, Juan Carlos
CORTELEZZI, Osvaldo
CHRISTE, Jorge J.
DAMIANI, Salvador
DE CARA, José Eduardo
DÍAZ, Diógenes C.
DÍAZ O'KELLY, Felipe F.
DI LEO, Amadeo
DOMINGORENA, Horacio O.
DOMÍNGUEZ, Luis C.

ELENA, Reinaldo
FABRIZIO, Luis N.
FERNÁNDEZ, José M.
FERNÁNDEZ, Raúl
FERNÁNDEZ MENDY, Julio O.
FERNÁNDEZ NÚÑEZ, Isidro
FERRARI, Luis
FERREIRA, Jorge W.
FIOL, Juan Antonio
FISCHER, Mauricio
FRAGA, Jorge Horacio
FREGA, José
GARAY, Fermín J.
GARCÍA LEYENDA, F. Rodolfo
GARIBALDI, Alberto
GARÓFALO, Roberto A.
GHIOLDI, Américo
GODOY, Ruperto Honorio
GÓMEZ MACHADO, Héctor
GONZÁLEZ BERGEZ, Pablo
GRAU, Mario A.
GUALCO, Jorge Nelson
GUTIÉRREZ, Eduardo O.
HARRINGTON, Luis J. D.
HERRERA, Oscar A.
IGLESIAS, Israel
JOFRE, Emilio
LEJARRAGA, Pablo
LILJESTHÖM, Eduardo R.
LOZANO, Martín
LUCCO, Juan A.
LLAVER, Santiago Felipe
LLORENS, Héctor
MAGGI, José M.
MAGLIETTI, Alberto R.
MALDONADO, Carlos A.
MANSILLA, José R.
MARSICO, Adalberto O.
MARTÍNEZ RAYMONDA, Rafael J.
MÉNDEZ DOYLE, Abel Víctor
MIGANNE, Carlos J.
MINSK, Hugo E.
MOLINAS, Ricardo F.
MONTE, Ricardo Alvaro
MOR ROIG, Arturo
MOSSET ITURRASPE, Mario
MUNIAGÜERRIA, Camilo
MUNIZ, Ramón A.
MURATORI, Eduardo D.
MURMIS, Oscar
MUSITANI, Héctor Francisco
OCAMPO, Carlos E.
OREJA, Pablo Fermín
ORTIZ HERNÁNDEZ, Angel H.

PATLIS, León
PEDRINI, Ferdinando
PENA, Roberto M.
PÉREZ GALLART, Alcides B.
PERNASETTI, Horacio
PESSINO, Felipe
PICADO, Estanislao
PIZARRO, Teodosio F.
POSSE, Melchor S.
RASINES, Osvaldo Gregorio
RENÉ, José María
RIAL, Oscar
RITACCO, Araldo A.
ROBERTO, Mario
RODRÍGUEZ, Rogelio Ramón
RODRÍGUEZ DEL REBOLLAR, José
RODRÍGUEZ VAGARÍA, Eduardo
ROIS, Roberto
ROSITO, M. Oscar
ROUZAUT, Adolfo R.
ROZAS, José E.
RUIZ, Amalio David
RUIZ, José Oscar
SAGO, Fayiz
SALADO, Francisco A.
SANDLER, Héctor R.
SANTA MARÍA, Oscar Hipólito
SARRULLE, Oscar E.
SCARPELLO, Cayetano
SCHAPIRA, David
SCHAPOSNIK, Eduardo C.
SERÚ GARCÍA, Alberto
SOLARI, Juan Antonio
TACHELLA, Eliberto S. J.
TORREIRO, Raúl
TORRIGLIA, Enrique F.
TORTONESE, Dante Oscar
TRÓCCOLI, Antonio A.
VACA LOBO, Juan Manuel
VACCAREZZA, Eduardo H.
VALENTE DE PÉREZ TORT, Lidia
VÁZQUEZ POL, José
VEDIA, Enrique de
VENTEMIGLIA, Rogelio A.
VILLANUEVA, Julio A.
VINALS, Fernando J.
ZANONI, Juan Claudio
ZARRIELLO, Raúl Jorge

AUSENTE, EN COMISION:

LEÓN, Luis Agustín

AUSENTE, CON LICENCIA:

CUERDO, Ramón

AUSENTES, CON AVISO:

AVETA, Francisco O.
CANTONI, Angel Serafin
CORAL, Juan Carlos
COSTANTINO, Adolfo I.
DEL PERO, Miguel P.
FIGUEROA, Jaime Hernán
GALEANO, Roberto A.
GARCÍA, Horacio
LESCANO, Edmundo A.

MARTÍNEZ, Ramón S.
MASSOLO, Eduardo A.
MERCADO, José Ignacio
MUSACCHIO, Vicente M.
NOUGUÉS, Isaías J.
PALACIOS, Alfredo L.
PEREIRA, Antonio
PÉREZ, Raúl
REQUENA, Raúl María
ROMEY VERDIER, Gabriel
SCALITER, Juan

SOLANA, Jorge D.
SOLARI, Eduardo A.
TARULLI, Pascual

AUSENTES, SIN AVISO:

AGUIRRE CÁMARA, José
ANTÓN, Luis
CÓGGIOLA, Luis S.
CORNEJO LINARES, Juan Carlos
CHEBLE, Francisco R.
PÉÑA Y LILLO, Silvestre

SUMARIO

- 1.—Aclaración formulada por el señor diputado Fernández Núñez relacionada con el homenaje a Sarmiento. (Pág. 3504.)
- 2.—Legislación represiva. Termina la consideración de los dictámenes de las comisiones de Legislación Penal y de Asuntos Constitucionales en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre la materia. (Pág. 3504.)
- 3.—Apéndice:

I.—Sanción de la Honorable Cámara. (Pág. 3517.)

II.—Inserciones. (Pág. 3518.)

—En Buenos Aires, a los once días del mes de septiembre de 1964, a la hora 15 y 30:

1

ACLARACION

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa la sesión.

Sr. Fernández Núñez. — Pido la palabra para formular una aclaración.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado Fernández Núñez.

Sr. Fernández Núñez. — Deseo referirme, con la debida tolerancia de la Cámara, a un problema ajeno al asunto en debate.

En el día de hoy, 11 de septiembre, se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento del prócer Domingo Faustino Sarmiento. La Comisión de Labor Parlamentaria había resuelto que en la primera sesión de tablas de esta semana la Cámara rindiera homenaje a tan ilustre figura de la historia argentina.

Como deseo que este cuerpo no quede en mora en este instante, en que el país está de pie rindiendo homenaje a quien tanto hizo en favor de la educación argentina, dejo expresada esta circunstancia haciendo presente que propondremos el homenaje en la primera sesión de tablas que realice la Cámara en la próxima semana.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Queda aclarado.

2

LEGISLACION REPRESIVA

Sr. Presidente (Mor Roig). — Prosigue la consideración en particular de los dictámenes de las comisiones de Legislación Penal y de Asuntos Constitucionales, contenidos en el orden del día 88 (1).

Tiene la palabra el señor diputado Maldonado.

Sr. Maldonado. — En la reunión realizada ayer, al ser considerado el proyecto por el que se incorporan algunas modificaciones al Código Penal, manifesté mi punto de vista favorable al despacho de la mayoría. Al considerarse en particular el artículo 268^a se produjeron opiniones encontradas con respecto a ese precepto. Se dijo, entre otras cosas, que es inconstitucional, por cuanto el funcionario público que fuera requerido para justificar un aumento excesivo de su patrimonio lo haría en virtud de una norma que repugna al artículo 18 de la Constitución de la República, en cuanto establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Yo creo —dicho sea con todo el respeto que me merecen los señores legisladores que no comparten mi punto de vista, porque yo tampoco comparto el de ellos— que no estamos en presencia de un precepto inconstitucional ni ante el caso previsto por el artículo 18 de nuestra Carta Magna en cuanto prohíbe que a un imputado se lo obligue a declarar contra sí mismo. Por el contrario, entiendo que no se trata de pedirle que declare contra sí mismo, sino en favor de sí mismo, porque el proyecto que consideramos establece que deberá ser requerido para que manifieste el porqué del aumento desmedido o exagerado de su patrimonio.

Siendo ello así, no veo cómo puede considerarse que se viola el artículo 18 de nuestra Constitución, porque además se trata de una exigencia que se impone a los funcionarios públicos únicamente. Es decir que el Estado puede imponer condiciones previas a quienes aspiren a desempeñarse en cargos públicos, sean administrativos, legislativos o de otra naturaleza. No legisla sino para el grupo de funcionarios públicos, porque todos conocemos hechos

(1) Véanse los Diarios de Sesiones del 2, 3, 4, 9 y 10 de septiembre de 1964, páginas 3053, 3236, 3290, 3336 y 3370, respectivamente.

realmente condenables ocurridos en distintas épocas en nuestro país, que dieron lugar al enriquecimiento excesivo de algunos funcionarios.

Por otra parte, estamos en presencia de un proyecto que consideramos típicamente social, y en materia de legislación social se admite universalmente la inversión de la prueba.

Todas las leyes laborales, ya sean de nuestro país o de cualquier otro, consagran el principio de la inversión de la prueba, y no sé de ningún fallo que las haya declarado inconstitucionales, porque eso significaría, de acuerdo con los conceptos que se han emitido en la sesión de ayer, que el demandado está obligado a declarar contra sí mismo. Y no hagamos la distinción de que las leyes de carácter laboral son leyes que tienen sanciones exclusivamente económicas, lo que no es exacto, porque el artículo 18 de nuestra Carta Magna establece en forma genérica la inviolabilidad de la defensa en juicio, ya sea de juicios criminales, civiles, administrativos, etcétera, donde se investiga a fondo el proceso a que está sometido el inculcado o el presunto culpable de un hecho o acto determinado.

Por lo demás, es cosa sabida que en nuestra Constitución no hay derechos absolutos, porque todos los derechos consagrados por nuestra Ley Fundamental se conforman con las leyes que reglamentan su ejercicio.

También se ha dicho que las leyes de fondo, como el Código Penal, no son susceptibles de reglamentación. Creo que se incurre en un error de apreciación, porque si ningún principio es absoluto, sino que se ejercita conforme con las leyes que lo reglamentan, no veo por qué los códigos de procedimientos provinciales, que son del resorte exclusivo de las provincias, de acuerdo con lo estatuido por la Constitución de 1853, no puedan ser considerados como reglamentación del código del cual se trate.

Tenemos así que la propia Constitución Nacional puede ser reglamentada en lo referente al ejercicio de los derechos que ella consagra, y al respecto puedo señalar que el artículo 28 establece que los principios, derechos y garantías reconocidos en los artículos anteriores no pueden ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Pero lo que me interesa destacar es que las leyes pueden reglamentar el ejercicio de derechos consagrados por la misma Constitución, lo que se logra a través de sanciones de este Congreso, y así mismo, en el caso de leyes dictadas por este Parlamento, que ellas pueden ser reglamentadas posteriormente por el poder administrador.

También el artículo 86, en su inciso 2º, dice que el presidente de la Nación expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias.

¿Cuál es el poder, funcionario o magistrado encargado de establecer si alguna ley dictada

por el Congreso altera algún precepto constitucional? Consecuentemente, ¿cuál es la autoridad encargada de establecer si el decreto reglamentario de la ley, dictado por el gobernante, altera el espíritu de dicha ley? Sabemos todos que es el Poder Judicial, por lo que llegado el caso concreto del proceso, el juez resolverá si es constitucional o no.

Los romanos de la antigüedad decían que la salud del pueblo era la suprema ley. Tratándose de una ley social de impostergable necesidad, muy bien podemos decir nosotros que el buen nombre de la República es la suprema ley para todos los argentinos.

Reitero que no estamos en presencia de un proyecto que en manera alguna viole las garantías de la defensa en juicio. Tampoco significa que al individuo sospechado o imputado se lo obligue a declarar contra sí mismo. Las leyes de orden público se ponen en ejercicio sin necesidad de que una parte interesada formule una denuncia; es decir, el juez o el fiscal tienen suficiente autoridad y están en la obligación de investigar un hecho cuando consideran que se ha violado un precepto de una ley de orden público, como la que estamos considerando.

Sr. Presidente. (Mor Roig).—En este momento tendría que hacer uso de la palabra el señor diputado Bilbao, quien no se encuentra en el recinto.

Tiene la palabra el señor diputado Avila.

Sr. Avila.—Señor presidente: indudablemente, el señor diputado preopinante tiene razón cuando señala que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; pero también es indudable que la inversión de la prueba en nuestro derecho es reconocida únicamente en materia de accidentes del trabajo. Agradecería a los señores diputados que, si hubiese otros casos, lo hagan notar.

Estamos legislando sobre una materia nueva, lo que nos obliga a ser cautos. En el informe que presenté sobre el proyecto de nuestra bancada señalaba: «De acuerdo con la reforma proyectada, se presume como ilícito cualquier aumento excesivo del patrimonio de un funcionario o empleado público, salvo prueba en contrario, a cargo de éste. La inversión de la prueba, en materia penal, que es propia de la legislación excepcional y de emergencia, abarcará en su ámbito a un alto porcentaje de habitantes de nuestro país, y será, sin duda, objeto de un estudio exhaustivo por parte de esta Honorable Cámara.»

Es decir que esta reserva que yo ya efectué en mi informe se hizo cierta, y esa duda que demostraba se ha visto efectivizada en forma palmaria con este debate que se ha realizado. Quería decir que a este artículo 268^a prácticamente se lo había tomado con pinzas.

¿De dónde partía la duda de mi partido al adoptar este artículo? Considerábamos que era

necesario organizar la institución, pero con un registro de declaraciones patrimoniales, es decir, que se debía comenzar a legislar sobre una base y una situación verdaderamente seria.

En las numerosas entrevistas que realizó la Comisión de Legislación Penal, hemos tenido oportunidad de conversar con verdaderos maestros del derecho penal. El profesor Laplaza dijo que no hay antecedentes de esta presunción de ilicitud, es decir, que en la legislación extranjera prácticamente no hay referencias sobre el problema que plantea el artículo 268⁴, sobre inversión de la prueba.

El profesor Núñez, autor del proyecto del Poder Ejecutivo, interrogado por el señor diputado Reñé sobre si había antecedentes en la materia, informó de manera textual y expresa: «No sé; éste es un problema nuestro.»

El profesor Jiménez de Asúa, interrogado también al respecto, informó que no conoce que haya antecedentes, pero que él proviene de un país donde el partido republicano, constituido por personas muy austeras, no hace necesario lucubrar una norma de este carácter.

Esa duda que expuse en mi informe sobre este artículo —a pesar de haber sido aceptado en mi proyecto— ya se ha disipado, pero en forma completamente negativa. El debate realizado el día de ayer en esta Cámara, con patriotismo, en forma desapasionada, en el que los intereses políticos estuvieron completamente ausentes cuando se tocó el artículo 268⁴, permitió que los legisladores pudieran expresar lo mejor de su gran capacidad, terminando así de disipar mi duda.

Por lo tanto, con toda honestidad, reconozco mi error al incluir el citado artículo en mi proyecto de ley. Por consiguiente, de común acuerdo con todos mis compañeros de bloque, hemos resuelto retirar este artículo de nuestro proyecto, por lo que desde ya anticipamos nuestro voto negativo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Bilbao.

Sr. Bilbao. — Creo que ésta es mi segunda intervención en el debate para comentar este artículo y por consiguiente debo hacer una exposición muy breve.

Sr. Presidente (Mor Roig). — De acuerdo con la anotación de la Presidencia, ésta sería su primera intervención en la consideración del artículo 268⁴.

Sr. Bilbao. — Muy bien.

Muy pocos argumentos cabe agregar a los que ya se han dado en el curso de este debate sobre la verdadera peligrosidad que constituye introducir una norma penal tal como está concebida en el despacho de la mayoría, porque más que plantear problemas procesales, la inversión de la prueba, el desconocimiento del principio tradicional de la presunción de inocencia en materia penal es el que trasciende, a poco que notemos que en la norma se estruc-

tura un verdadero delito formal, que se encontraría perfeccionado por la simple negativa del empleado a responder al requerimiento de dar explicaciones suficientes sobre su enriquecimiento.

Sr. Llaver. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Bilbao. — Cómo no, señor diputado.

Sr. Llaver. — Le pregunto al señor diputado si no es la misma situación que se plantea en el falso testimonio cuando un testigo que, por la ley, está obligado a deponer, se niega a hacerlo.

Sr. Bilbao. — Le voy a contestar al señor diputado. Las presunciones en el derecho son corrientes. Consultando algunos tratadistas sobre este punto, he podido establecer que las presunciones, y aun las ficciones, son necesarias como instrumento intelectual, muchas veces, para estructurar el derecho.

Podría dar muchos ejemplos, entre ellos el que ha citado el señor diputado. También aquella norma que presupone el conocimiento de la ley aunque en los hechos no se la conozca; y aquella otra que establece que cuando el delincuente es menor de 16 años no es considerado como tal. Son todas presunciones, que operan como verdaderos instrumentos intelectuales para poder establecer y crear el derecho, a fin de poder regular de esta manera la convivencia social.

Pero muy distinto es lo que estamos tratando hoy. Aquí se trata de presunciones en materia penal y, lo que es más grave, de una presunción específica, como es la de dolo. Se presume que estamos frente a un delincuente. ¿Qué es, al fin y al cabo, la presunción, sino algo que nos permite suponer que es verdadero lo que en realidad es una mera probabilidad? ¿Vamos entonces a validar una norma penal que establece un delito grave, fuertemente penado, además, por el solo hecho de que el funcionario se niegue a dar las explicaciones que se le requieran por la autoridad que resulte competente?

Vamos a crear, incluso, una presunción que ni siquiera es *juris tantum*, es decir, sujeta a prueba en contrario, sino una presunción de las llamadas *juris et de jure*, es decir, de aquellas que no admiten prueba en contrario. Basta la negativa del empleado para que esté perfeccionado el delito.

Creo que la única manera de resolver este problema es radiando del despacho la norma que estamos tratando. Esta clase de disposiciones pertenece más bien a otra disciplina, también penal, que es la que en doctrina se llama derecho penal contravencional. Hay una escuela la penal que la considera con personalidad independiente a la del derecho penal sustantivo, y es aquella que también se llama derecho penal administrativo. Yo consideraría no esta norma, pero sí algo parecido, e incorporado, por

ejemplo, a una ley, que estableciera la necesidad y la obligatoriedad del registro de bienes de los funcionarios y empleados públicos, e incluso que creara una presunción contraria para el funcionario o empleado que, requerido por su superior para el cumplimiento de una obligación establecida por la ley, se negara a dar las explicaciones que se le pidan sobre el origen de sus bienes. Entonces, esta presunción se utilizaría ya como una herramienta para estructurar un sistema probatorio, pero nunca desconociendo al empleado el derecho a su defensa y a aportar pruebas a su favor.

Tratando de soslayar este problema, alguien ha dicho que en la justicia de instrucción cuando se instruye un sumario no sólo se busca producir pruebas en contra, sino también pruebas a favor, porque en definitiva lo que se persigue en la instrucción sumarial es tratar de reconstruir los hechos en toda su realidad posible. Si bien esto es innegable, pues de otra manera la justicia dejaría de cumplir su función específica, también debemos reconocer como sumamente peligroso establecer una presunción de este tipo *juris et de jure* nada menos que para configurar un delito. Yo la consideraría más propia de una norma de tipo penal administrativo o contravencional que crease una presunción de culpa contra el empleado a quien, siéndole fácil explicar al Estado cómo se enriqueció, se negare a hacerlo, y que vaya a someterse al proceso penal con esa presunción contraria, pero con una presunción *juris tantum*, es decir sujeta a prueba en contrario, para que justifique en ese proceso penal su conducta, con plenas posibilidades de defensa.

No quiero abusar de la paciencia de la Honorable Cámara, que ayer terminó un poco agotada con este tema que ahora se renueva. Pero sirvan mis consideraciones finales para dejar sentada mi convicción más íntima, y también la de los diputados que integran nuestro bloque, en contra de esta norma tal como ha sido estructurada.

Pediría a los señores diputados que firmaron ese despacho de mayoría que mediten un poco y que consientan en que esta norma no se incorpore al Código Penal, con el compromiso, por nuestra parte, de introducir en una futura ley que regule el registro de bienes de los funcionarios y empleados públicos una norma que cree una presunción contraria al empleado o funcionario que, debidamente requerido, se niegue a dar explicaciones sobre un acrecentamiento excesivo de su patrimonio.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Jofré, a quien reglamentariamente le corresponden cinco minutos, por tratarse de una segunda intervención.

Sr. Jofré. — Voy a ser muy breve. Solamente he pedido la palabra a fin de que no quede flotando en el ambiente la impresión de que

nuestro bloque no está de acuerdo en tomar medidas sumamente severas con quienes se enriquecen indebidamente en la función pública. Muy por el contrario; como lo señalamos ayer tanto el señor diputado Bilbao como quien habla, consideramos que deben ser castigados severamente todos los empleados y funcionarios que se enriquecen en forma ilícita; pero justamente, para poder hacer más efectivas esas sanciones contra quienes actúan de esa manera, es indispensable que la legislación sea realmente positiva y esté de acuerdo con las normas constitucionales.

Estimo que es errónea la interpretación del señor diputado Maldonado en el sentido de que una disposición de esta naturaleza no afectaría el principio constitucional de que nadie puede declarar contra sí mismo; para comprobarlo voy a referirme a la jurisprudencia de nuestros tribunales y a la de los Estados Unidos, ya que la Constitución de este país tiene términos semejantes a la nuestra.

La Corte Suprema de Justicia ha declarado en reiteradas oportunidades que se presume que una persona es honesta mientras no se pruebe lo contrario. Esta jurisprudencia ha sido reiteradamente refirmada desde que se estableció la Corte Suprema; de modo que es un principio que se viene arrastrando en nuestra jurisprudencia desde hace más de cien años. Pero, por otra parte, para que se interprete esa jurisprudencia tal como corresponde, es indispensable que se pruebe que el funcionario público es deshonesto, y no que se le diga que es deshonesto y que debe probar lo contrario.

La circunstancia de que se exija al funcionario que aporte pruebas para justificar que no se ha enriquecido injustamente es, justamente, obligarlo a declarar contra sí mismo. La jurisprudencia de los Estados Unidos está dada en el caso Hale contra Henkel, en un fallo notable del juez Brown, donde sostuvo que el objeto de la cláusula constitucional que prohíban ser obligado a declarar contra sí mismo «es establecer, en lenguaje expreso y sobre una base firme, el principio general de la jurisprudencia inglesa y norteamericana, de que nadie será obligado a dar testimonio que pueda exponerlo a ser enjuiciado criminalmente. No se establece que no pueda ser obligado a testimoniar sobre hechos que puedan comprometer su reputación en cuanto a probidad o aun deshonrarlo, sino que la línea está marcada por el testimonio que pueda exponerlo a ser enjuiciado».

Por su parte, Tascón ha dicho que «sería contrario a la moral y a la naturaleza que la ley obligara a una persona a declarar contra sí misma en asuntos de que pueda resultarle pena, y decimos que sería inmoral porque se colocaría a la persona en la alternativa de: o violar los fueros de la verdad para eludir la pena, o acarrearle su propia condenación por respetar esos fueros».

La situación, además, es muy distinta en materia civil que en materia penal. Los autores —tengo las opiniones de algunos sobre mi banca— han dicho que es muy diferente la situación de quien tiene una relación contractual que lo obliga a decir, como ocurre en las leyes laborales, o como ocurre con cualquier obligación de tipo civil donde uno tiene que reconocer o no la existencia de la deuda, que cuando tiene que declarar en forma que le pueda significar una pena castigada por el Código Penal.

Por eso comparto la opinión que acaba de dar mi compañero de sector, el doctor Bilbao, que coincide con lo que manifesté en el día de ayer en cuanto a que esta norma no debe ser una norma del Código Penal sino una disposición expresa de la ley que crea el registro de los bienes de los empleados públicos. Tampoco puede ser una sanción de tipo penal, sino que debe crearse la presunción de que se ha enriquecido indebidamente el funcionario que no haya demostrado, dentro de los plazos que corresponda y de los emplazamientos que pueda hacerle la autoridad respectiva, que pueden ser el jefe del registro y aun los partidos políticos, que el enriquecimiento o aumento patrimonial obedecen a causas absolutamente legítimas.

Si la Honorable Cámara decide tratar a la mayor brevedad el proyecto de creación del registro de los bienes de los empleados públicos, nosotros vamos a estar en un todo de acuerdo. Más aún, el diputado que habla tiene presentado un proyecto en ese sentido y cree que es conveniente tratarlo.

En consecuencia, solicito de la Comisión de Legislación Penal que postergue o retire la consideración de este artículo hasta tanto se discuta y sancione el proyecto de ley de creación del registro de los bienes de los empleados públicos, y que fijemos la penúltima sesión de este mes a los efectos de tratar el proyecto que tenemos presentado y los que tienen presentados otros sectores, relativos a la creación del Registro de Bienes de los Empleados Públicos.

Sr. Llaver. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Jofré. — Sí, señor diputado.

Sr. Llaver. — Es sólo para preguntar al señor diputado si en la proposición que formula se encuentra involucrado, además de la creación del registro patrimonial de los empleados públicos, todo lo concerniente al enriquecimiento ilegítimo de los funcionarios públicos, que es el tema fundamental que informa el artículo que estamos considerando, o si la proposición se limita exclusivamente al registro patrimonial de los empleados públicos al solo efecto administrativo.

Formulo la pregunta porque desearía saber si el bloque del señor diputado está animado por el propósito de comprender en la legislación nada más que a los funcionarios actuales, lo que importaría legislar exclusivamente en el campo del derecho administrativo; o si también quieren incluir en la legislación a los ex fun-

cionarios, que pudieron haberse enriquecido en la función y que no alcanzaron a ser sancionados durante su ejercicio.

Sr. Jofré. — El alcance de mis manifestaciones es el siguiente: creo que debemos dejar sancionada toda la parte referente a las penalidades aplicables al funcionario que se enriquece ilícitamente, y postergar la consideración del artículo 268^a, que es el que establece la presunción y el castigo por no justificar el aumento excesivo del patrimonio.

De manera que quedarían sancionadas ya las disposiciones con que se castiga a quienes se enriquezcan indebidamente, y solamente quedaría a considerar la parte del artículo a que me referí.

Formulo, pues, moción concreta en el sentido expresado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Caro.

Sr. Caro. — Creo que a esta altura de las deliberaciones, el debate está agotado en sus aspectos teóricos, porque han quedado esclarecidos todos los puntos en que se asientan las discrepancias de los distintos sectores. En consecuencia, adhiero a la posición sustentada por el diputado preopinante, en el sentido de solicitar a la comisión el retiro liso y llano del artículo, adelantando que la opinión de nuestro bloque, al respecto, es coincidente con los propósitos que alienta la comisión.

Vale decir que hemos de apoyar la elaboración de un nuevo proyecto o la consideración de los ya existentes, a fin de dictar normas precisas y concretas, tendientes a reprimir el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. No somos insensibles a la inquietud demostrada, porque éste es uno de los mayores lastres con que carga nuestra organización burocrática, que perjudica el prestigio de las instituciones de la República y a los partidos políticos, de quienes se nutre la administración pública.

Creo que al sancionar medidas moralizadoras que castiguen severamente la acción de los malos funcionarios, habremos impreso un nuevo estilo a la vida política argentina, que se viene desenvolviendo en recíprocas acusaciones de inmoralidad pública. Por eso, adelantamos nuestra solidaridad con la consideración de cualquier cuestión de esta naturaleza que se presente con las características de racionalidad y ecuanimidad requeridas.

En consecuencia, considerando que la discusión está agotada, y contrariando una actitud que es habitual en mí, hago moción de que se cierre el debate, pero que antes se requiera a la comisión que acepte el temperamento de retirar el artículo que se considera.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Bravo.

Sr. Bravo (C. A.). — Señor presidente: con toda buena voluntad, la comisión va a procu-

rar avenirse a soluciones que permitan resolver los problemas que preocupan a la Cámara en este aspecto del enriquecimiento ilícito de los funcionarios. Pero se impone que pronuncie algunas palabras —porque la comisión está profundamente convencida de su bondad— para defender el despacho que estamos considerando.

El tema es de lo más apasionante. El enriquecimiento ilícito de los funcionarios ha preocupado desde antiguo a la opinión pública. En Roma, de la que alguien ha dicho que arrancó el derecho a los dioses, este tema mereció la atención de los senadores, sobre todo referida a las exacciones a que los funcionarios de provincia sometían a los habitantes de los territorios en que ejercían sus funciones, dando motivo a airadas protestas, que originaron la sanción de diversas leyes para evitarlas.

También se ha hablado en este debate del famoso juicio de residencia que las leyes de Indias habían establecido para los representantes de España en las colonias americanas.

En épocas más cercanas, la opinión pública de todo el mundo se ha visto conmovida por episodios en que el enriquecimiento de los funcionarios constituía el espectáculo más deprimente para la fe y la confianza de los pueblos.

Yo respeto la opinión de todos los señores legisladores. No pretendo en esta exposición, que aspiro a que sea objetiva, herir a nadie ni resucitar hechos del pasado. Bien saben todos que estas disposiciones han de regir para el futuro. Podemos decir que de ahora en adelante los funcionarios y empleados del gobierno estarán sometidos a la vigilancia de estas disposiciones penales, de conformidad con el artículo 18 de la Constitución Nacional.

Pero también habrán de comprender los señores legisladores que bastante pesada es la tarea del gobierno de vigilar el comportamiento de sus funcionarios como para agregarle la carga de producir la prueba en los casos palpables y definitivos para todo el mundo de que un funcionario se ha enriquecido exageradamente en el ejercicio de la función pública.

Se ha dicho que el artículo 268^a crea el delito de sospecha, es decir, que se incrimina al funcionario que habiendo ingresado en la administración pública con un determinado patrimonio, transcurrido el tiempo se observa que ha aumentado, no interesando si el aumento es considerable o excesivo, porque estas expresiones son de una latitud muy difícil de precisar. Se ha expresado entonces que el Estado debe tomar a su cargo la difícil tarea de probar que ese enriquecimiento se ha producido en el ejercicio de las funciones y de manera ilegítima. No hay tal delito de sospecha; no hay tampoco, ni siquiera, la inversión de la prueba, porque aquí no se obliga a nadie a probar un hecho negativo, sino que se sanciona al funcionario

que, habiéndose enriquecido en el ejercicio de sus funciones y requerido a ello, no probara el origen de su fortuna. Esos son los fundamentos de este artículo. Un hecho positivo como es el enriquecimiento del funcionario, no un hecho abstracto o negativo. Es un hecho positivo que todo el mundo puede comprobar: ese funcionario se ha enriquecido; ahí está su patrimonio, ha aumentado durante el ejercicio de sus funciones. Requerido para que justifique el origen del bien, de ese hecho positivo, en caso de desobediencia o de negarse a justificar el origen de sus bienes, entran a jugar las disposiciones de este artículo. No hay aquí un delito negativo ni inversión de la prueba. No es éste un delito como los que contempla el Código Penal generalmente, que son de carácter activo.

Saben los señores legisladores que se cometen delitos por acción, como el que mata, y también delitos por omisión. Este artículo contempla el caso del delito por omisión, es decir, el caso de un funcionario que no justificara el origen de su fortuna. Como dije al iniciar esta breve intervención, sabemos cuán difícil resulta para el Estado comprobar el origen de la fortuna de sus funcionarios. Y sabemos también que esta clase de delitos es deplorable porque, como dijo un eminente jurista español, el enriquecimiento ilícito de un funcionario es el más grave de los delitos, porque además de aprehender o de apoderarse de bienes a través de dádivas, exacciones, etcétera, se comete otro delito más grave, que es el de traicionar la confianza que una persona mereció cuando se la designó para la función que desempeña. Por ello es doblemente reprochable su conducta.

Digo esto sin ánimo de herir la susceptibilidad de los señores legisladores. Debemos ser inexorables con esos funcionarios y no nos debemos detener ante nada. Ese es el espíritu con que hemos proyectado este artículo, que no es creación nuestra. No es tampoco algo que venga de sorpresa ni que se haya hecho sin estudio. La legislación del país está llena de antecedentes sobre este aspecto. Tengo aquí un Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, del año 1958, en el que figura un proyecto del doctor Perette sobre este problema cuyo artículo 8º establece que «todo funcionario o empleado comprendido en la presente ley está obligado a acreditar que su aumento patrimonial y los de su cónyuge, si no mediara separación judicial, proviene de las siguientes causas», y enumera una serie de ellas.

Pero el artículo que nosotros auspiciamos me parece que es más orgánico.

Sr. Sago. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Bravo (C. A.). — Sí, señor diputado.

Sr. Sago. — Nosotros estamos de acuerdo, pero deseamos decir lo siguiente. La redacción que auspicia el señor diputado coincide más o menos con el proyecto del doctor Soler. Pero Soler en

la nota al artículo dice: «El derecho administrativo debe tomar determinadas previsiones, incluso la de exigir una formal declaración de bienes, de modo que la falsedad ideológica del declarante sea punible por producirse en instrumento público. Todo ello sin perjuicio de que esa ley especial prevea también otras infracciones menores.» Vale decir, que lo lanzaba como una necesidad, para que inmediatamente se creara la estructura necesaria a fin de que el autor del delito fuera castigado.

Como un antecedente mejor todavía, señor diputado, está el artículo 15 del decreto 4.778 que rige actualmente, redactado en otra forma, que yo creo protege más al funcionario público honesto, al decir que aquel que «durante el desempeño o dentro de los tres años siguientes a la cesación de la función pública no quisiere o no pudiere justificar ante la autoridad competente cualquier incremento importante de su patrimonio producido durante el desempeño y comprobado por dicha autoridad». Vale decir, que se establece un plazo, tres años, además de ocurrir ante autoridad competente, lo que quiere decir que tiene la garantía judicial necesaria.

Sr. Bravo (C. A.). — También el proyecto del doctor Palacios del año 1961, que reproduce uno anterior, establece en su artículo 29 que «salvo prueba en contrario se presume enriquecimiento ilegítimo todo aumento de patrimonio, inclusive el del cónyuge...». Es decir, que establece la misma disposición en otros términos, pero en el fondo es idéntica a la del inciso que estamos considerando.

En el proyecto de Código Penal del doctor Sebastián Soler, capítulo II, De la corrupción de los funcionarios públicos, también se establece en el artículo 346, inciso d), que «el enriquecimiento ilícito será reprimido con prisión... si no justificare, al ser debidamente requerida la procedencia de un incremento considerable de su patrimonio posterior a la asunción del cargo».

Lo mismo se determina en el decreto 4.778, artículo 15, y en una ley de la provincia de Buenos Aires, citada ayer por el señor diputado Díaz O'Kelly, la 5.579, de enriquecimiento ilegítimo de los funcionarios públicos, de fecha 12 de septiembre de 1950.

Todos estos proyectos y leyes establecen definitivamente la circunstancia de que, quien al ser requerido no justificare el origen de su fortuna, está incurso en la figura del enriquecimiento ilegítimo.

Admito que la ley de la provincia de Buenos Aires —en cuya Legislatura hemos ocupado bancas muchos de los que hoy estamos en esta Cámara—, como en el proyecto del doctor Palacios y en el del diputado Perette, se establecía la creación del registro patrimonial de bienes de los funcionarios y empleados públicos. Pero lo que fundamentalmente quiero dejar establecido, es que no se trata de un delito de sospecha, no hay inversión de la prueba, no

se ataca la defensa en juicio, no se obliga a nadie a declarar contra sí mismo, como decía el señor diputado Jofré. Simplemente, aquí se obliga a los funcionarios a justificar de dónde proviene su riqueza, su patrimonio. Y no será la administración pública la que va a decidir si hay o no delito, si el funcionario o empleado está incurso en el delito, porque eso es del resorte del Poder Judicial nacional o de las provincias, y en sus integrantes debemos tener plena fe.

Sr. Bilbao. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Bravo (C. A.). — Sí, señor diputado.

Sr. Bilbao. — Me atrevo a decir, señor diputado, que si se mantiene la norma, la justicia no va a poder opinar. Porque aquí ocurre una sustitución del juicio del juez por el juicio anticipado de la ley. Se estructura un delito formal, y por ley se establece ya la existencia de un delito por la sola negativa del funcionario. De manera que el juicio del juez está de más.

Esto es lo que constituye la gravedad de la norma, ya que ni siquiera se estructura una presunción sujeta a prueba en contrario, toda vez que queda configurado el delito e inculminado el funcionario.

Sr. Bravo (C. A.). — No estoy de acuerdo con la interpretación del señor diputado.

La negativa del funcionario traerá sus consecuencias, pero lo que aquí importa es que justifique el incremento de sus bienes, y si un funcionario público requerido a justificar el aumento de los bienes se niega, está violando las disposiciones de esta ley y, por ello, será sancionado.

Los funcionarios que ejercen el Poder Judicial del país serán los que vayan a determinar si el enriquecimiento del funcionario es legítimo o ilegítimo. El proyecto, en ese aspecto, les delega las facultades de decisión, y yo tengo confianza en la majestad de la justicia, porque los pueblos, los países y los gobiernos deben confiar en la justicia, pues el día que ello no ocurra, no habrá república ni democracia en éste ni en cualquier otro país.

Concuerdo con los señores diputados en que estas disposiciones tienen que jugar armoniosamente con el funcionario de un registro patrimonial de bienes. Lo señalo con toda lealtad. Ya hemos advertido el problema desde los primeros momentos en que comenzamos a considerar el proyecto, y pensamos que en el momento en que esta Cámara o el Senado entre a considerar la creación del registro patrimonial de los bienes de los funcionarios —que ya funciona en la provincia de Buenos Aires— será llegada la oportunidad de solucionar ese problema.

Retiro el artículo 268⁴, con el compromiso de que la comisión, no bien se sancione la creación del registro nacional de bienes de los funcionarios y empleados públicos, considerará nuevamente la modificación del Código Penal.

El retiro de este artículo lo realiza la comisión para que la Honorable Cámara pueda trabajar en concordia, y para que se sancione el enriquecimiento ilícito contemplado en otros incisos.

En homenaje a esa concordia, la comisión consiente en retirar únicamente el artículo 268⁴, y con el compromiso que toman todos los bloques que componen la Honorable Cámara —salvo que algún sector, expresamente lo desautorice— en el sentido que he indicado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — De acuerdo con el artículo 106 del reglamento, corresponde que la Honorable Cámara decida si autoriza a la comisión a retirar el artículo 268⁴.

—Se llama para votar.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el retiro del artículo 268⁴, propuesto por la comisión.

—Resulta afirmativa de 93 votos; votan 98 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Ha quedado retirado el artículo 268⁴.

Tiene la palabra el señor diputado Jofré.

Sr. Jofré. — No sé si será ésta la oportunidad correspondiente para proponer que se fije la sesión del día 23 del corriente para considerar, con o sin despacho de comisión, los proyectos relativos a la creación del registro de los bienes de empleados públicos.

Sr. Presidente (Mor Roig). — No es ésta la instancia reglamentaria para determinar preferencias. Como se trata de una sesión especial, oportunamente será considerada la proposición del señor diputado.

Sr. Jofré. — Sólo pido que la Comisión de Labor Parlamentaria tenga en cuenta mis palabras, a los efectos pertinentes.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 69.

Tiene la palabra el señor diputado Caro.

Sr. Caro. — Para proponer a la comisión una reforma de tipo conceptual al artículo 69, mediante el siguiente agregado en su parte final: «cuando del empleo resultare un daño o perjuicio para el servicio».

Esto significa el cambio conceptual de la figura, porque tal cual ha despachado la comisión este artículo, se instituye un delito de tipo formal. Lo que propongo es introducir el elemento material del daño al bien mal utilizado o el perjuicio al servicio por el mal uso que hiciere el funcionario.

Debemos ser cautos, no extremar la nota ni pasarnos a la otra alforja; no debemos dejar la puerta abierta para la intriga ni para la persecución menuda. Es muy frecuente, por ejemplo, apreciar que el uso que el funcionario público hace de los automotores, a veces abusivo y contrario a los intereses del Estado, es en la

mayoría de los casos normal para el objeto al que realmente están afectados, como sería el caso de un vehículo puesto al servicio de un ministro de la Nación. Por el decoro del cargo, por su investidura y por las imposiciones de la vida social, se prestan a veces servicios que no son específicos de la función, pero que también son menesteres lícitos.

Por esta circunstancia, cuando del empleo no resultare un daño para la administración o un perjuicio para el servicio, no se podría incriminar, tal como lo hace en forma tan lata el proyecto de la comisión.

Concretamente, pido que se modifique este artículo mediante el agregado que propongo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Bravo.

Sr. Bravo (C. A.). — Señor presidente: la comisión no acepta la sugerencia formulada por el señor diputado Caro, por cuanto este artículo 69 fue tomado del proyecto del año 1960, del capítulo «Del peculado y la malversación». Coincide con el artículo 354, que dice: «Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, ...etcétera, el funcionario, ...etcétera, que empleare en provecho propio o de terceros trabajos o servicios pagados por la Administración Pública.» Se refiere concretamente al peculado.

Si le agregáramos la expresión «cuando de ello resultare daño», lo estaríamos transformando en malversación.

Quiero aclarar que este artículo, que puede preocupar en muchos aspectos, debe ser aceptado con una gran prudencia y con criterio racional. No es posible que el simple uso normal y racional de un automóvil de la administración por un funcionario de cierta categoría importe la configuración de este delito. Ese no es el criterio de la comisión, ni tampoco el del Poder Ejecutivo.

Hay antecedentes extranjeros. En el tratado de Maggiori, se refiere concretamente a esta clase de utilización de servicios o trabajos, que son los que él denominaba peculado de uso, pero que en el Código Penal italiano ha sido eliminado para transformarse en una cuestión meramente administrativa, que tiene sanciones administrativas.

El proyecto del Poder Ejecutivo tiende a darle, ante muchos abusos que han ocurrido y que pueden ocurrir, el carácter de sanción penal. Lo que nosotros queremos castigar es el peculado. La razonabilidad de su aplicación dependerá del Poder Judicial de la Nación; y los funcionarios y empleados, si bien tienen derechos, tienen también obligaciones, y en la conducta y mesura en su comportamiento se basa la tranquilidad de que no se cometerán abusos y desmanes en trasgresión de esta disposición del Código Penal.

La comisión considera que tal como está redactado el texto es correcto, por cuanto lo que corresponde considerar es exclusivamente el

peculado y no la malversación, que está contemplada en otro artículo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 6º del dictamen de la mayoría de la comisión.

— Resulta afirmativa de 70 votos; votan 101 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el agregado propuesto por el señor diputado Caro y no aceptado por la comisión.

— Resulta negativa de 70 votos; votan 104 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 7º.

Tiene la palabra el señor diputado Bilbao.

Sr. Bilbao. — Nuestro despacho contiene dos disposiciones, las de los artículos 3º y 4º, que no están contenidas en el despacho de la mayoría.

Estimo que ha llegado el momento de solicitar a la Honorable Cámara que considere la posibilidad de incluir en el proyecto de ley la norma del artículo 3º de nuestro despacho, que dice: «Incorpórase como artículo 222 del Código Penal (título IX, capítulo 2, del libro segundo), el siguiente: Artículo 222. — Será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que públicamente ultrajare la bandera, el escudo o el himno de la Nación.»

El artículo 4º de nuestro dictamen dispone: «Sustitúyense las siguientes penas establecidas por el Código Penal: La del artículo 226, por prisión de dos a diez años. La del artículo 229, por prisión de uno a seis años. La del artículo 230, por prisión de uno a cuatro años.»

Desearía consultar al señor miembro informante del despacho de mayoría si la comisión está de acuerdo en que este asunto se trate de inmediato.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Carlos A. Bravo.

Sr. Bravo (C. A.). — La comisión nada observa al pedido formulado por el señor diputado Bilbao.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia consulta al señor diputado Bilbao en qué oportunidad han de tratarse los agregados contenidos en el despacho de comisión que suscriben los señores diputados Belgrano Rawson y Bilbao.

Sr. Bilbao. — El artículo 3º, que modifica el artículo 222 del Código Penal, puede considerarse de inmediato, y el artículo 4º, que establece agravaciones penales, puede ser considerado al final.

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿El señor diputado Bilbao propone que el artículo 3º del dictamen de minoría sea considerado con anterioridad al artículo 7º del despacho?

Sr. Bilbao. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿Acepta la comisión el artículo nuevo que figura como ter-

cero en el despacho de los señores diputados Belgrano Rawson y Bilbao?

Sr. Bravo (C. A.). — La comisión acepta.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo nuevo, que iría como artículo 7º del proyecto de ley, aceptado por la comisión.

— Resulta afirmativa de 77 votos; votan 100 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Avila.

Sr. Avila. — Nuestro bloque ha votado afirmativamente este artículo, que figuraba en nuestro despacho. Pero deseamos que se le efectúe un agregado, de modo que a continuación de las palabras «... el escudo y el himno de la Nación», se añada lo siguiente: «monumentos y esculturas de próceres y hechos históricos.»

Muy a menudo, en las columnas de los diarios aparece la crónica de hechos que nos afligen y angustian porque son verdaderos agravios a los héroes de nuestra nacionalidad. Algunos seres desorbitados e irresponsables expresan su disconformidad con la actitud de nuestros próceres embadurnando, ensuciando o destrozando estatuas de aquellos que tanto han hecho por nuestro país.

Considero que estos actos avergüenzan a la ciudadanía argentina porque significan un retroceso en el avance de nuestra cultura y de nuestra civilización. Como considero que ello aflige también a los señores diputados, confío en que el agregado que propongo sea votado afirmativamente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Sago.

Sr. Sago. — Creo que estamos legislando en forma peligrosa, porque mediante agregados de este tipo vamos a superponer en el código una serie de delitos, muchos de ellos ya existentes.

Si no me equivoco, el agregado que propone el señor diputado Avila coincide con el delito por daños del artículo 183, que el artículo 184 lo agrava con una pena de tres meses a cuatro años cuando sea ejecutado «en archivos, registros, bibliotecas, museos o en puentes, caminos, paseos u otros bienes de uso público, o tumbas, signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos de arte colocados en edificios o lugares públicos.»

Creo que el delito de ultraje de que trata la reforma propiciada por el señor diputado Bilbao, que ahora amplía el señor diputado Avila, coincide con el delito de daño contenido en los artículos 183 y 184 del Código Penal. Por eso llamo a la reflexión acerca de este aspecto, porque nos vamos a encontrar con una serie de figuras que ya hemos votado en forma coincidente, literalmente algunas de ellas, con artículos ya existentes en el Código Penal.

Sr. Elena. — Lo señalé recién, señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿El señor diputado Avila mantiene el agregado propuesto?

Sr. Avila. — Considero que la observación del señor diputado Fayiz Sago se refiere a daños materiales. Con tal sentido se puede dañar un automóvil o un edificio. Pero lo que yo propongo es algo más serio y elevado. Se refiere al agravio inferido a la nacionalidad, al espíritu argentino o a la memoria de nuestros próceres. Se trata de actos de desequilibrados mentales que debemos sancionar. Una persona puede estar en desacuerdo con la actuación de Sarmiento, pero ello no lo autoriza a embadurnar una estatua del prócer.

Sr. Sago. — Lo que más defiende el código es precisamente lo que atañe al sentido de argentinidad. El artículo 183 habla del que «destruyere, inutilizare o hiciere desaparecer, o de cualquier modo dañare...». Se entiende que el ultraje es el más grave daño que se puede hacer a un símbolo nacional o a una estatua de un prócer.

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Bravo (C. A.). — La comisión, que ya consideró en sus reuniones la sugerencia del señor diputado Avila, no acepta el agregado, porque entiende que, como lo expresó el señor diputado Sago, está incluido en los artículos del Código Penal que reprimen el daño.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el agregado propuesto por el señor diputado Avila, no aceptado por la comisión.

— Resulta negativa de 84 votos; votan 99 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el agregado propuesto por el señor diputado Bilbao, que se va a leer por Secretaría.

Sr. Secretario (Oliver). — A continuación, como artículo 8º, iría el siguiente: «Sustitúyense las siguientes penas establecidas por el Código Penal: la del artículo 226, por prisión de dos a diez años; la del artículo 229, por prisión de uno a seis años; la del artículo 230, por prisión de uno a cuatro años.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 8º propuesto por el señor diputado Bilbao.

— Resulta afirmativa de 63 votos; votan 97 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 7º del despacho, que pasaría a ser 9º.

Sr. Bravo (C. A.). — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Bravo.

Sr. Bravo (C. A.). — Propongo que el artículo quede redactado en la forma en que venía el proyecto originario del Poder Ejecutivo, es decir que, después de la palabra «documentos», se agregue: «que por la ley deban quedar secretos».

La redacción sería, pues, la siguiente: «Será reprimido con prisión de un mes a dos años e

inhabilitación especial por uno a cuatro años el funcionario o empleado público que revelare hechos, actuaciones o documentos que, por la ley, deben quedar secretos.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 7º, que pasa a ser 9º, con el agregado propuesto por la comisión.

— Resulta afirmativa de 66 votos; votan 97 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración al artículo 8º del despacho, que pasa a ser 10.

Tiene la palabra el señor diputado Carlos Bravo.

Sr. Bravo (C. A.). — Es para salvar un error de imprenta en el texto impreso de este artículo. Donde dice: «La del artículo 257...» debe decir: «La del artículo 258...»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se toma nota de la corrección, señor diputado.

Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 67 votos; votan 99 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 9º, que pasa a ser 11.

Se va a votar.

Sr. Fernández (R.). — Pido la palabra.

— Resulta afirmativa de 69 votos; votan 99 señores diputados.

Sr. Fernández (R.). — Pido reconsideración del artículo, señor presidente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — El señor diputado Raúl Fernández pide reconsideración del artículo votado a efectos de poder exponer sus observaciones, ya que había solicitado la palabra en momentos en que se estaba produciendo la votación.

Se va a votar el pedido de reconsideración. Son necesarios dos tercios de votos.

— Resulta negativa de 51 votos; votan 98 señores diputados.

Sr. Martínez Raymonda. — Pido la palabra para proponer un agregado al artículo 9º, que pasa a ser 11 y que acaba de aprobarse.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Martínez Raymonda.

Sr. Martínez Raymonda. — Propongo el siguiente agregado: «Igual sanción se aplicará en el caso de las órdenes de pago emitidas contra los organismos cooperativos de crédito.»

La fundamentación de este agregado es muy simple. El movimiento de crédito cooperativo es una realidad económica y financiera en la República. El volumen de sus operaciones ha alcanzado ya cifras cercanas a los 20.000 millones de pesos anuales; funcionan en el país alrededor de quinientas cajas cooperativas de crédito, con más de 500.000 asociados; sus capitales superan los 1.800 millones de pesos. Todo

ese conjunto financiero está operando a través de un instrumento legal que se llama la orden de pago, que reemplaza en su eficacia y en su operatividad al cheque que los bancos usan para las operaciones con sus clientes.

De esta manera, la orden de pago se ha transformado en un instrumento con características muy similares a las del cheque, pero no goza de la garantía de la sanción penal en caso de que no tenga provisión de fondos cuando fuera presentada al organismo cooperativo contra el cual fue emitida.

La realidad económica a que he aludido hace necesario que la sanción enérgica que se ha establecido con respecto al cheque sin provisión de fondos se extienda al caso de la orden de pago emitida sin respaldo, ya que ésta causa el mismo perjuicio al interés jurídico tutelado por esta norma que el que provoca el cheque sin fondos. Considero que de esta manera protegeremos a una enorme masa de habitantes de la República que diariamente opera con órdenes de pago en sus actividades comerciales, y que no cuenta con la sanción legal necesaria para que sea más eficaz.

Sr. Serú García. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Quisiera que el señor diputado nos aclarara si se refiere a las órdenes de pago extendidas por las cooperativas de crédito.

Sr. Martínez Raymonda. — No, señor diputado. Se trata de las órdenes de pago emitidas por los socios de las cooperativas contra ellas y sobre las cuentas personales de los mismos.

El cheque se emite contra un banco, contra los depósitos que existen en las cuentas corrientes.

Sr. Serú García. — Es decir, contra las cooperativas. ¿Y por qué, solamente contra las cooperativas?

Sr. Martínez Raymonda. — Porque son las únicas que pueden admitir órdenes de pago en función de las cuentas personales que tienen sus socios. Las cuentas personales de los socios participan de la naturaleza y características de las cuentas corrientes bancarias.

Sr. Serú García. — Hacía la pregunta porque tengo entendido que no son solamente las cooperativas las que posibilitan esta movilización de capitales, sino que también hay sociedades anónimas de crédito.

Sr. Bobillo. — Pero a partir de la reglamentación del 30 de julio del Banco Central, las sociedades financieras no pueden tener más cuentas corrientes de tipo bancario.

Sr. Serú García. — Es decir, que serían solamente las cooperativas. Con esto queda aclarado.

Sr. Martínez Raymonda. — Completo mi pensamiento.

Creo que de esta forma saneamos un papel que está en el comercio, que tiene gran difusión y cumple con eficacia la expansión del crédito

en el ámbito de las cooperativas, llevando solución a los problemas financieros de grandes sectores del país, rebajando las cuotas de interés, combatiendo la usura y, en una palabra, poniendo en marcha la solidaridad que el movimiento cooperativo comporta. Tenemos que darle por esta vía la solidez y garantía necesarias a este instrumento con el que operan sus asociados.

En consecuencia, repito, propongo el agregado que diga: «Igual sanción se aplicará en el caso de las órdenes de pago emitidas contra los organismos cooperativos de crédito.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Llaver.

Sr. Llaver. — Deseo formular una aclaración. Entiendo que al votarse el artículo 9º de manera afirmativa se ha votado solamente su encabezamiento, puesto que el mismo contiene cuatro apartados o incisos que estimo deben votarse en forma separada. Deseo que se formule esta aclaración porque existe el propósito de peticionar una reforma con relación al contenido del apartado 1º de este artículo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia aclara, que, no habiéndose hecho indicación en sentido contrario, se votó todo el artículo.

Sr. Llaver. — En ese caso solicito una reconsideración de la votación para que se establezca que la misma ha sido nada más que respecto al encabezamiento, desde el momento que el inciso 1º contiene normas que, si se mantienen tal como están en el despacho, pueden importar situaciones sumamente graves y configurativas de delitos, sin que haya existido el propósito de incurrir en ellos por parte del librador del cheque.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el pedido de reconsideración formulado por el señor diputado Llaver respecto del artículo 9º que pasa a ser 11. Se requieren dos tercios.

— Resulta negativa de 62 votos; votan 101 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el agregado propuesto por el señor diputado Martínez Raymonda.

— Resulta negativa de 58 votos; votan 102 señores diputados.

Sr. Martínez Raymonda. — Seguirá habiendo órdenes de pago sin fondos.

Sr. Ocampo. — Pido rectificación de la votación.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar si se rectifica la votación recaída en el agregado propuesto por el señor diputado Martínez Raymonda.

— Resulta negativa de 58 votos; votan 102 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 10 del despacho, que pasa a ser 12.

Tiene la palabra el señor diputado Bravo.

Sr. Bravo (C. A.). — Vamos a proponer que en la parte donde dice «...menos en los casos de los artículos 262 y 264...» se agregue la referencia al artículo 260, que contempla la malversación, en cuanto dice que «será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrara una aplicación diferente de aquella a la que estuviesen destinados».

Es un artículo que no tiene tanta importancia como para agravar la situación del imputado haciéndola no excarcelable.

En concreto, la parte modificada quedaría así: «...menos los casos de los artículos 260, 262 y 264...».

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Sago.

Sr. Sago. — Nuestro bloque va a votar en contra del artículo en debate, por las razones dadas oportunamente con respecto a la excarcelación y a lo que se entiende por excarcelación.

Creemos peligroso introducir nuevos motivos de no excarcelación, ya que ésta es una figura propia del Código de Procedimientos, sobre la que debe actuar el juez esencialmente, de acuerdo con la calidad de la peligrosidad del imputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 10, que pasa a ser 12, con el agregado propuesto por el señor diputado Carlos A. Bravo.

— Resulta afirmativa de 56 votos; votan 98 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Bilbao.

Sr. Bilbao. — El artículo 15 de nuestro despacho establece «a los hechos juzgados o pendientes de decisión judicial que están comprendidos en el régimen de la ley 15.293, les será aplicable el artículo 29 del Código Penal». Me parece conveniente introducir esta norma, respetando el principio — como se trata de una ley transitoria — de que en el caso de la derogación de esa norma se aplicará siempre la ley penal más benigna en beneficio del reo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia informa que este mismo agregado había sido propuesto también por el señor diputado Muñiz, y que oportunamente la comisión había anticipado su aceptación.

Sr. Sago. — Coincide también textualmente con el artículo 59 del despacho suscrito por las bancadas de la UCRI, del MIR y justicialista. Por eso vamos a votar por la afirmativa.

Sr. Bravo (C. A.). — La comisión, consecuente con lo expresado durante el debate, en el sentido

de que iba a aceptar este agregado, reitera su afirmación.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por Secretaría se va a leer el agregado propuesto.

Sr. Secretario (Oliver). — Sería el siguiente: «Artículo 15. — A los hechos juzgados o pendientes de decisión judicial que están comprendidos en el régimen de la ley 15.293 les será aplicable el artículo 29 del Código Penal.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Muñiz.

Sr. Muñiz. — Me parece que en la forma en que está redactado el agregado no es lo suficientemente claro. Se me ocurre que es mejor redacción la del artículo 39 de mi despacho, porque hace expresa referencia a las penas.

Es exacto que del proyecto del señor diputado Bilbao puede desprenderse que se refiere a las penas; pero creo que es mejor poner claramente la palabra penas. ¿No le parece, señor diputado Bilbao?

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Bilbao.

Sr. Bilbao. — Me parece que sí, señor diputado, porque en definitiva el artículo 29 del Código Penal establece que siempre se aplicará la pena más benigna, o que desaparecerá la pena en caso de que desaparezca el hecho que se califica como delito.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por Secretaría se va a leer el artículo propuesto por el señor diputado Muñiz, en sustitución del agregado propuesto por el señor diputado Bilbao, y aceptado por éste.

Sr. Secretario (Oliver). — El artículo 39 del proyecto del señor diputado Muñiz dice: «En los procesos o penas que reconozcan su origen en el régimen de la ley 15.293, se aplicará la disposición contenida en el artículo 29 del Código Penal.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo leído por Secretaría, que llevaría el número 13.

— Resulta afirmativa de 86 votos; votan 101 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — El artículo 11 del despacho, que pasa a ser 14, es de forma. Queda sancionado el proyecto de ley (1).

Tiene la palabra el señor diputado González Bergez.

Sr. González Bergez. — Dada la forma en que ha sido considerado el despacho y la introducción, durante el debate, de una serie de artículos tomados de otros dictámenes, se ha producido algún desorden en la correlación de los artículos. Me parece de buen método, para la claridad de la ley e, incluso, para la facilidad de la consulta ulterior, que los artículos de la sanción dictada por la Cámara se ordenen de acuerdo con los artículos del Código Pe-

(1) Véase el texto de la sanción en el Apéndice.

nal que son modificados, sustituidos o complementados. Inclusive, hay dos artículos, el 8º y el 10, que tienen idéntico encabezamiento: «Sustitúyense las siguientes penas establecidas en el Código Penal.»

Propongo que la Cámara autorice a la Presidencia para que, antes de hacer la pertinente comunicación al Honorable Senado, ordene los artículos del texto sancionado siguiendo la correlación de los del Código Penal modificados, y unificando en una sola norma los artículos 8º y 10, votados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿Acepta la comisión el temperamento propuesto por el señor diputado González Bergez?

Sr. Bravo (C. A.). — La comisión acepta, señor presidente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a llamar para votar.

—Mientras se llama para votar.

Sr. Molinas. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Molinas.

Sr. Molinas. — A efectos de suplir una omisión en que incurre el despacho de la comisión, no con propósito de lucimiento personal sino en nombre de la representación demócrata progresista, considero que debe agregarse entre los antecedentes de esta sanción el proyecto que presentó el diputado que habla —que es el primero sobre derogación de las leyes represivas—, el 4 de noviembre de 1963.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se tendrá en cuenta la indicación del señor diputado.

Se va a votar la moción del señor diputado González Bergez, sobre ordenamiento de la sanción dada por la Cámara.

—Resulta afirmativa de 82 votos; votan 100 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia procederá al ordenamiento autorizado por la Honorable Cámara.

Corresponde votar las inserciones solicitadas.

Sr. Bravo (C. A.). — Pido la palabra para solicitar una nueva inserción.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Bravo.

Sr. Bravo (C. A.). — Solicito la inserción en el Diario de Sesiones de las exposiciones hechas por los señores profesores Sebastián Soler, Luis Jiménez de Asúa y Ricardo Núñez en el seno de la comisión, que habían sido dadas ya a publicidad.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se van a votar las inserciones solicitadas por los señores diputados Sago, Lejarraga y Bravo.

—Resulta afirmativa de 79 votos; votan 101 señores diputados (1).

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el pedido de inserción formulado por el señor diputado Molinas.

—Resulta afirmativa de 72 votos; votan 101 señores diputados (2).

Sr. Sago. — Pido la palabra para formular una indicación, que ya había anunciado en la discusión en general, con respecto al estudio del Código Penal.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Señor diputado: se ha cumplido el objeto de la sesión especial. La Presidencia le ruega que formule su indicación en la oportunidad correspondiente.

Sr. Sago. — Es simplemente para pedir que la Comisión de Legislación Penal se aboque al estudio de la reforma del código sobre la base de los antecedentes legislativos existentes y del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en 1960, del que es autor el profesor Sebastián Soler. Vale decir, solicito que la comisión inicie ya el estudio de la reforma integral del código, asunto en el que todos los señores diputados están de acuerdo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Queda constancia del pedido formulado por el señor diputado. Queda levantada la sesión especial.

—Es la hora 17 y 30.

(1) y (2) Véase el texto de las inserciones en el Apéndice.